

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

INE/JGE46/2025

**RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/RI/SPEN/19/2025**

Ciudad de México, 19 de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos los autos para resolver el recurso de inconformidad **INE/RI/SPEN/19/2025**, promovido por [REDACTED], en contra de la Resolución dictada en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], en la que se determinó sancionarlo con una amonestación derivado de la acreditación de faltas de carácter laboral.

G L O S A R I O

Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.
DEAJ	Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Electoral.
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
DESPEN	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral.
Dirección Jurídica	Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, ahora DEAJ.
Estatuto	Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
INE o Instituto	Instituto Nacional Electoral.
JGE	Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

Lineamientos de conciliación	Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad.
Parte recurrente o parte actora	[REDACTED]
Procedimiento	Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED]
Junta Local	Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León.
Reglamento	Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento Interior	Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

A. Procedimiento

1) Hechos denunciados. El veintidós de enero de dos mil veinticuatro¹, se recibió en la Dirección Jurídica, a través del Sistema de Archivo Institucional, el oficio INE/DESPEN/CENI/27/2024, mediante el cual, la Coordinadora de Enlace Normativo e Información de la DESPEN reenvió el diverso INE/UTF/DRN/1434/2024, así como sus anexos, suscritos por el Encargado de Despacho de la UTF relacionado con el conocimiento presuntos hechos irregulares atribuibles al hoy recurrente, consistentes en:

- Que el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, a las trece horas con cuarenta minutos, se recibió en la Vocalía Secretarial de la Junta Local, un escrito de queja en materia de fiscalización, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano.

¹ En adelante todas las fechas se refieren al año dos mil veinticuatro, salvo manifestación expresa.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

- Que el Vocal Secretario de la citada Junta, en esa misma fecha, en un primer momento, hizo del conocimiento de la UTCE la presentación del referido escrito de queja, recibiendo respuesta de la citada Unidad Técnica en el sentido de que dicho escrito versaba sobre temas de fiscalización, por lo que el mismo debía remitirse a dicha área del Instituto.
- En consecuencia, el Vocal Secretario referido procedió a remitir de manera física el escrito de queja a la Oficina de Enlace de Fiscalización de la Junta Local, cuyo responsable es el ahora recurrente.
- Siendo que, el nueve de enero siguiente, el Abogado Fiscalizador de la Junta Local, por instrucciones de la parte actora, remitió vía correo electrónico a la UTF el citado escrito de queja.

2) Radicación e investigación del procedimiento. El diecinueve de febrero, fue radicado el procedimiento laboral bajo la clave de expediente INE/DJ/HASL/[REDACTED]; derivado de ello, se le ordenó a la Subdirección de Investigación de la Dirección Jurídica que realizara las actuaciones pertinentes.

Cabe precisar que, la autoridad instructora contó con un plazo de seis meses para investigar y determinar el inicio del procedimiento laboral, el cual transcurrió del veintidós de enero al veintidós de julio.

3) Inicio del procedimiento. El tres de junio, se dictó el Acuerdo de inicio del procedimiento en contra del probable infractor, y, derivado de ello, se realizó el trámite correspondiente.

El cinco de junio siguiente, la parte actora fue notificada de manera personal sobre el inicio del procedimiento laboral sancionador.

4) Escrito de contestación. El quince de junio, dentro del término de diez días hábiles, la parte actora presentó el escrito de contestación sobre las conductas presuntamente infractoras y ofreció las pruebas de descargo que consideró pertinentes.

5) Admisión de pruebas. El uno de julio, la autoridad instructora se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por el probable infractor y se le concedió un término de cinco días hábiles para que, en vía de alegatos, formulara las expresiones que a su derecho conviniera.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

6) Alegatos. El nueve de julio, la parte actora presentó su escrito de alegatos.

7) Acuerdo de trámite. El veintiocho de agosto, la autoridad instructora acordó la recepción del escrito de alegatos y ordenó la revisión exhaustiva del expediente para poder determinar su cierre.

8) Cierre de instrucción. Mediante Acuerdo de veinticinco de noviembre, derivado de que no existían actuaciones pendientes de realizar, se decretó el cierre de la instrucción del procedimiento.

9) Resolución (acto impugnado). El veintinueve de enero de dos mil veinticinco, la Secretaría Ejecutiva del INE resolvió el procedimiento en el sentido de tener por acreditada la conducta transgresora a la normativa electoral y, derivado de ello, se le impuso al hoy recurrente una sanción consistente en una amonestación.

10) Notificación. El diez de febrero de dos mil veinticinco, la referida determinación le fue notificada personalmente a la parte recurrente.

B. Recurso de inconformidad

11) Escrito inicial. El veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, el recurrente presentó ante la Junta Local su escrito de recurso de inconformidad, con la finalidad de controvertir la Resolución indicada en el numeral 9 anterior.

12) Turno. El veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, la DEAJ ordenó la integración del expediente del recurso de inconformidad **INE/RI/SPEN/19/2025** y lo remitió a la DEPPP, como el órgano encargado de integrar, sustanciar y elaborar el proyecto de Resolución que corresponda.

13) Admisión, cierre de instrucción y proyecto de Resolución. En su oportunidad, al cumplirse con los requisitos de procedibilidad cronológica, objetiva y formal, establecidos en los artículos 358, 359, 360, 361 y 365 del Estatuto, se admitió el recurso de inconformidad, y al no haber pruebas que desahogar ni actuaciones que realizar, se ordenó el cierre de instrucción y la elaboración del proyecto de Resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Competencia

Esta JGE es competente para conocer el presente recurso de inconformidad, en términos de lo establecido en los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución; 48, numeral 1, inciso k), de la LGIPE; 360, fracción I, del Estatuto; 40, numeral 1, inciso o), del Reglamento Interior; y 52, numerales 1 y 2, de los Lineamientos de conciliación, por tratarse de una Resolución emitida por la Secretaría Ejecutiva del INE, en el procedimiento, a través del cual se determinó sancionar a la parte recurrente con amonestación al haberse acreditado diversas faltas al Estatuto.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia

El recurso de inconformidad cumple con los requisitos de procedencia, según las consideraciones siguientes:

A. Forma

El presente recurso satisface los requisitos previstos en el artículo 365 del Estatuto, toda vez que, en el escrito inicial, se precisa: el órgano al que se dirige; el nombre y firma autógrafa de la persona recurrente; el correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones; la Resolución impugnada y se hacen valer agravios en contra de ésta.

B. Legitimación e interés jurídico

Se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 359 y 365 del Estatuto, toda vez que, el recurso fue promovido por la parte denunciada (recurrente) dentro del procedimiento, actuando por propio derecho, en donde hace valer agravios para combatir la Resolución impugnada; por lo que, en términos de lo previsto en el artículo 289, fracción III, del Estatuto; y 690² de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, debe reconocerse la legitimación e interés jurídico para actuar en la presente instancia.

² “...**Artículo 690.** Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por el Tribunal...”.

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

C. Oportunidad

El recurso de inconformidad fue presentado en tiempo y forma, toda vez que, la Resolución le fue notificada al recurrente el diez de febrero de dos mil veinticinco, surtiendo efectos el mismo día, según lo previsto en el artículo 281, párrafo segundo, del Estatuto.

De ahí que, el plazo de diez días hábiles para impugnar la Resolución del procedimiento laboral, según lo previsto en el artículo 361 del Estatuto, transcurrió del martes once al lunes veinticuatro, ambos del mes de febrero de dos mil veinticinco; ello, sin considerar los días inhábiles (sábados y domingos) según lo previsto en el artículo 279, párrafo segundo, del Estatuto.

En consecuencia, como el recurso de inconformidad fue presentado el veintiuno de febrero del presente año ante la Junta Local, éste resulta oportuno, de conformidad con lo siguiente:

ENERO DE 2025						
Miércoles 29	Jueves 30	Viernes 31				
Emisión de la Resolución impugnada						
FEBRERO DE 2025						
Sábado 01	Domingo 02	Lunes 03	Martes 04	Miércoles 05	Jueves 06	Viernes 07
Sábado 08	Domingo 09	Lunes 10	Martes 11	Miércoles 12	Jueves 13	Viernes 14
		Notificación personal (surte efectos)	Día 01 del plazo	Día 02 del plazo	Día 03 del plazo	Día 04 del plazo
Sábado 15	Domingo 16	Lunes 17	Martes 18	Miércoles 19	Jueves 20	Viernes 21
Inhábil	Inhábil	Día 05 del plazo	Día 06 del plazo	Día 07 del plazo	Día 08 del plazo	Día 09 del plazo Interposición del recurso

TERCERO. Cuestión previa

Caducidad

Como cuestión previa, se analizará de oficio la caducidad de la facultad sancionatoria del INE para condenar las posibles conductas infractoras dentro de un procedimiento laboral; ello, de conformidad con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido en las tesis relevantes XXIV/2013, de rubro: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO”, y XVI/2001, de rubro: “CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES”³.

Con base en lo previsto en el artículo 310 del Estatuto, la facultad para determinar el inicio del procedimiento laboral sancionador caduca en el plazo de seis meses, el cual debe contabilizarse a partir de que la autoridad instructora tenga conocimiento del acto presuntamente irregular. En adición, el artículo 280 del mismo ordenamiento, prevé que los plazos fijados en meses se toman conforme a día calendario.

Cabe precisar que, el artículo 319 del Estatuto, prevé que el procedimiento puede iniciarse de oficio o a petición de parte; en el primer caso (oficio), ocurre cuando cualquiera de las áreas u órganos del INE hacen del conocimiento de la autoridad instructora la posible comisión de conductas infractoras; en el segundo supuesto (petición de parte), opera cuando existe una denuncia en contra de alguna persona servidora pública del Instituto.

El artículo 320, primer párrafo, del Estatuto, determina que cuando la autoridad instructora tenga conocimiento de la probable comisión de una falta laboral, iniciará una etapa preliminar de investigación, en la que se recabarán las pruebas necesarias para determinar si ha lugar al inicio del procedimiento.

Mientras que, el artículo 321, primer párrafo, del Estatuto, contempla que si la autoridad instructora considera que existen elementos suficientes para determinar que existe la conducta infractora y su probable responsabilidad, ordenará el inicio del procedimiento; asimismo, el artículo 323 del mismo ordenamiento, determina que el auto de inicio es el acto con el que formalmente comienza el procedimiento.

Con base en la normativa señalada, la autoridad instructora tiene un plazo de seis meses, contados a partir de que recibió la noticia de una probable falta en materia laboral para realizar las diligencias correspondientes y finalizar la investigación; esto, con el propósito de tener los elementos para emitir el auto que dé inicio al procedimiento.

³ Al respecto, cabe precisar que la consulta de los criterios de tesis relevantes y jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede realizarse en el portal de internet: <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/>

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

En este orden de ideas, tal y como se expuso en la Resolución impugnada⁴, así como del análisis de las constancias en autos, se advierte que el día veintidós de enero de dos mil veinticuatro, la DEAJ recibió el primer oficio relacionado con el conocimiento posibles hechos irregulares atribuidos al ahora recurrente; en tanto que el acuerdo de inicio del procedimiento fue emitido el día tres de junio de dos mil veinticuatro, por lo que resulta evidente que no se excedió el plazo de seis meses para iniciar el procedimiento; en consecuencia, no caducó la facultad sancionatoria, por lo que resulta procedente el análisis de los motivos de inconformidad aducidos en el presente recurso.

CUARTO. Estudio de fondo

Resumen de la Resolución impugnada

En la Resolución impugnada, la Secretaría Ejecutiva del INE realizó el estudio de la controversia del procedimiento de la manera siguiente:

En un principio, precisó, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la manera en que ocurrieron los hechos materia de análisis del procedimiento, en donde tuvo por demostrado lo siguiente:

- Que el Vocal Secretario de la Junta Local, informó que el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, a las trece horas con cuarenta minutos, se había recibido un escrito de queja suscrito por la persona representante de Movimiento Ciudadano en la Vocalía Secretarial de la Junta Local.
- Que ese mismo día, el citado funcionario público, a las quince horas con veintinueve minutos, envió el referido escrito de queja vía correo electrónico a la UTCE.
- Que, a las diecisiete horas con seis minutos de ese mismo treinta de noviembre de dos mil veintitrés, el Vocal Secretario recibió vía correo electrónico respuesta por parte del personal de la UTCE, en el cual se le informó que al tratarse de un escrito en materia de fiscalización, ésta tenía que ser remitida a la UTF.
- En atención a lo informado por el personal de la UTCE, el Vocal Secretario, en ese mismo día, remitió de manera física el escrito de queja a la oficina de Enlace de Fiscalización de la Junta Local, cuyo responsable es el hoy recurrente.

⁴ Según consta en el párrafo 21 de la resolución impugnada, a foja 6.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

- Que el nueve de enero, el Abogado Fiscalizador adscrito a la UTF de la Junta Local instrumentó un acta de hechos en la que hizo constar que el Enlace de Fiscalización le había requerido un escrito, por lo que, al estarlo buscando, se percató que en un conjunto de papeles que se encontraban en alguno de los escritorios de la oficina, estaba la queja promovida por la persona representante de Movimiento Ciudadano, misma que contenía dos sellos de recepción de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés; el primero, de la Vocalía Secretarial y, el segundo, de la oficina de Enlace de Fiscalización, ambos de la Junta Local, lo cual hizo del conocimiento de la persona titular de dicha oficina.
- Derivado de lo anterior, el mismo nueve de enero, el Abogado Fiscalizador, remitió la queja a la UTF para su tramitación, por instrucciones del hoy recurrente.
- Que, a las veinte horas del nueve de enero de ese año, la Subdirectora de Resoluciones y Normatividad de la UTF, en presencia de la Jefa de Departamento de Resoluciones y Normatividad, así como una Analista Resolutora A instrumentó el acta de hechos para dejar constancia de la remisión del escrito de queja de manera extemporánea.

Con base en lo anterior, a partir del análisis de las pruebas y las defensas que hizo valer el hoy recurrente en el procedimiento, se acreditó que el escrito de queja en materia de fiscalización que promovió la representación de Movimiento Ciudadano ante la Junta Local había sido recibido el treinta de noviembre a las diecisiete horas con cuarenta minutos en la oficina de Enlace de Fiscalización y que ese día el titular de dicha oficina no se encontraba presente.

Bajo ese contexto, en la Resolución se sustenta que la infracción que se le atribuye a la hoy parte actora era el hecho de no haber desempeñado sus labores con diligencia, cuidado y esmero apropiados, al reconocer que el escrito de queja se encontraba trasapelado y fue hallado hasta el nueve de enero siguiente, mismo que fue enviado a la UTF hasta ese día.

Por lo que, no existía una eximente de responsabilidad bajo la sola consideración que el probable infractor -recurrente- no haya recibido personalmente la documentación física, enfatizando que la misma se recibió en la oficina donde él es el titular y, por ende, se encontraba bajo su responsabilidad.

Así, se consideró que el hoy recurrente solamente se limitó a señalar que no había recibido personalmente el escrito de queja por estar realizando ese día -treinta de noviembre de dos mil veintitrés- trabajo en campo; sin embargo, no demostró los

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

tramos de control implementados como titular de la oficina de Enlace de Fiscalización para la recepción de documentos en físico y, en específico, de los escritos de queja, aunado a que no explicó quiénes eran las personas designadas como responsables del sello de la oficina a su cargo o encargadas de recibir la documentación.

Asimismo, en la Resolución se sostiene que si bien no se podía fincar una responsabilidad directa al hoy recurrente de haber recibido de manera física la queja, era su responsabilidad dar seguimiento, instruir y atender lo dispuesto en el Reglamento, observando las funciones descritas en su cédula de puesto, referentes a la coordinación, organización y supervisión de los procedimientos establecidos en el Reglamento y gestionar los recursos humanos para lograr el cumplimiento de las tareas asignadas.

Valorando las relatadas consideraciones, en la Resolución se concluyó que se tenía acreditada la conducta infractora consistente en la dilación en la remisión de la queja en materia de fiscalización a la UTF, dentro de las cuarenta y ocho horas después de su recepción, tomando en cuenta que ello ocurrió cuarenta días después, sin que se demostrara que el hoy recurrente haya gestionado de manera adecuada y diligente los recursos humanos para el cumplimiento de las tareas que tiene asignadas, en contravención a lo previsto en el artículo 71, fracciones XI y XIII, del Estatuto.

Así, para individualizar la infracción e imponer la sanción correspondiente, en la Resolución se consideraron las circunstancias particulares del caso, concluyendo que se trató de una omisión en el actuar del infractor, por no haber desempeñado sus labores con diligencia, cuidado y esmero apropiados, apartándose de la obligación que tenía como responsable de la oficina de Enlace de Fiscalización de implementar tramos de control de la oficina de Enlace de Fiscalización, para la recepción de documentos en físico y explicar quiénes eran las personas designadas como responsables de recibir la documentación.

Asimismo, se estableció que no era reincidente, toda vez que no se tenía registro de una conducta similar por la que se le haya sancionado previamente, y se argumentó que aun y cuando se demostró la infracción, la gravedad de la infracción debía considerarse como leve, ya que se tuvo como atenuante de la conducta que la UTF le dio el trámite correspondiente al escrito de queja, por lo que, se consideró como sanción amonestar al responsable, al tratarse de la sanción menos lesiva pero a su vez la más idónea para inhibir la reiteración de ese tipo de conductas.

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

Síntesis de agravios

1.- Indebida fundamentación, motivación, exhaustividad e incongruencia de la Resolución emitida

El recurrente argumenta que se razonaron de forma incorrecta los hechos y circunstancias vinculadas a la controversia; lo anterior, porque la autoridad resolutora señaló la imposibilidad de la determinación de la responsabilidad directa de la persona que recibió el escrito de queja, así como que, al momento en que fue informado de dicho escrito, de manera inmediata instruyó su envío.

Sostiene que le causa agravio la calificación del tipo de infracción, al referirse que se estaba ante una conducta de omisión, al inobservar y dejar de hacer lo que la normativa establece, lo que resulta contradictorio con lo establecido en la Resolución respecto al envío tardío del escrito de queja, con lo cual se hace patente que no existió una omisión imputable al hoy recurrente, sino una dilación no imputable al mismo.

También, afirma que, para la aplicación de una medida de apremio o corrección disciplinaria, primero debió situarse en un supuesto de incumplimiento, dilación o desacato previo, lo cual no ocurrió, por lo que, antes de imponer la amonestación de manera directa, debió existir una determinación de apercibimiento, en cualquier otro procedimiento anterior que hubiese resuelto.

Por último, señala que la determinación no se ajustó a los parámetros de legalidad, en atención a los precedentes expresados por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SX-JE-46/2023 y, SX-JE-75/2023 y acumulados.

Fijación de la *controversia*

Derivado de las consideraciones previstas en el punto que antecede, se advierte que la controversia en el presente asunto se constriñe a determinar si, como lo sostiene el recurrente, la Resolución del procedimiento se encuentra o no debidamente fundada y motivada, así como falta de congruencia y exhaustividad, o por el contrario ésta se encuentra apegada a derecho.

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

Análisis

Precisados los motivos de inconformidad, esta JGE procede a realizar el estudio de los agravios que hace valer la parte recurrente, los cuales, por cuestión de método, se analizarán de manera conjunta de conformidad con el orden temático expuesto, toda vez que los planteamientos comparten una misma finalidad, sin que ello le depare un perjuicio en su esfera jurídica al recurrente, toda vez que, lo jurídicamente relevante es que la totalidad de las alegaciones sean estudiadas dentro de la presente Resolución⁵.

En tal sentido, esta autoridad deberá atender al resultado de la investigación y de las pruebas recabadas y analizadas por las autoridades instructora y resolutora, tomando en consideración las circunstancias particulares del asunto en estudio, así como la naturaleza misma de las infracciones objeto del procedimiento, se valoraran las pruebas que permitan conocer la verdad de los hechos y, en su caso, tener por acreditada o no la conducta infractora, para concluir si confirma o no el fallo correspondiente.

Marco normativo

Fundamentación y motivación

El artículo 16 de la Constitución establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar la realización de actos que incidan en la esfera de las personas.

El deber de fundamentación y motivación también tiene sustento en el artículo 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el deber de motivación es una de las “debidas garantías” previstas en dicho precepto, con el que se pretende salvaguardar el derecho a un debido proceso.⁶

⁵ Ello de conformidad con la jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

⁶ Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que establece el derecho de las garantías judiciales.

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

A efecto de cumplir con la garantía de fundamentación y motivación, la autoridad responsable debe señalar, en cualquier parte de la determinación, el precepto aplicable al caso y expresar las circunstancias, razones especiales y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión. Así, resulta ineludible la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En ese sentido, conforme con el principio de legalidad, todos los actos y resoluciones de autoridad, independientemente de su naturaleza, deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las disposiciones legales aplicables, satisfaciendo la exigencia de fundamentación y motivación.

La primera (fundamentación) se cumple con la existencia de una norma que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante la actuación de esa misma autoridad en la precisión del precepto o preceptos legales aplicables al caso.

La segunda (motivación), se satisface con la expresión de las circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, para lo cual debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, a fin de evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento del acto, actualizan el supuesto normativo del precepto aludido por la autoridad.

De ahí que, la fundamentación y motivación, constituyan exigencias de todo acto de autoridad, que permiten deducir con claridad las normas aplicadas y la justificación del por qué ésta ha actuado en determinado sentido, por lo que la ausencia de tales elementos ocurre cuando se omite argumentar el dispositivo legal aplicable y las razones para considerar que el caso se puede adecuar a la hipótesis normativa.

En ese contexto, la indebida fundamentación de una Resolución se da cuando la autoridad responsable invoque una norma que no resulte aplicable al caso concreto, mientras que la indebida motivación será cuando la responsable sí exprese las razones que consideró para tomar una determinada decisión, pero éstas no sean congruentes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

Es decir, una autoridad incurrirá en una indebida fundamentación y motivación cuando exista una incongruencia entre las normas invocadas y los razonamientos formulados en sus determinaciones.

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

Mientras que, la ausencia de fundamentar y motivar el fallo se actualiza cuando la autoridad es omisa en exponer las bases legales y argumentos de la decisión.

Congruencia y exhaustividad

De conformidad con los artículos 17 de la Constitución, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo cual comprende la obligación para los órganos de impartición de justicia de emitir las sentencias de forma exhaustiva.

Por su parte, el principio de exhaustividad impone a las personas juzgadoras el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.

Si se trata de un juicio o recurso susceptible de abrir una nueva instancia o juicio para revisar la Resolución de primer o siguiente grado, es preciso que tanto las autoridades administrativas como jurisdiccionales realicen el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria⁷.

En ese sentido, el principio de exhaustividad se cumple cuando en la Resolución se agota cuidadosamente el estudio de todos los planteamientos de las partes y que constituyan la causa de pedir, porque con ello se asegura la certeza jurídica que debe privar en cualquier respuesta dada por una autoridad a las personas justiciables en aras del principio de seguridad jurídica.

El principio de exhaustividad está vinculado con el de congruencia de las sentencias, porque las exigencias señaladas suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda Resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente.

⁷ Jurisprudencia 12/2001, de rubro “Exhaustividad en las resoluciones. cómo se cumple”.

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

Sobre la base de lo expuesto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que, una Resolución no debe contener (con relación con las pretensiones de las partes) más de lo pedido, menos de lo pedido, y/o algo distinto a lo pedido⁸.

También, la referida Sala, ha determinado que es necesario destacar que el requisito de congruencia de la sentencia debe ser estudiado, desde dos perspectivas diferentes y complementarias: como requisito interno y externo de la Resolución⁹.

Así, la congruencia externa, como principio rector de toda Resolución, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o Resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia.

Por lo que hace a la congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

Caso concreto

Por una parte, el recurrente afirma que existe una incongruencia en la Resolución, así como una falta de exhaustividad, en virtud que, la autoridad resolutora señaló que no era posible determinar una responsabilidad directa en su contra, por el hecho de recibir personalmente el escrito de queja promovido por Movimiento Ciudadano ante la Junta Local.

No obstante, también señala que el tipo de infracción se calificó **como de omisión** al inobservar y dejar de atender lo que la normativa establece, contradiciendo con ello, la afirmación de que la queja en materia de fiscalización se envió de manera tardía.

Bajo estas consideraciones, el recurrente alega que no existió una omisión en la remisión del escrito de queja en materia de fiscalización imputable a él, pues en cuanto tuvo conocimiento de ésta, instruyó al Abogado Fiscalizador que la misma se remitiera de manera inmediata a la UTF, cumpliendo con su responsabilidad de actuar con diligencia, cuidado y esmero en el desempeño de sus funciones, en acatamiento con las disposiciones constitucionales, legales, estatutarias y

⁸ SUP-JDC-1272/2021 y SUP-JDC-124/2022.

⁹ Jurisprudencia 28/2009, de rubro: "Congruencia externa e interna. se debe cumplir en toda sentencia".

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

reglamentarias, por lo que, en su caso, existió una dilación no imputable a su persona.

Para esta JGE los argumentos señalados por el recurrente son **infundados**, en razón de que parte de una premisa incorrecta al considerar que la omisión que se le imputa fue exclusivamente por la dilación en la remisión de la queja en materia de fiscalización a la UTF, en contravención de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento.

Esto es así, tomando en cuenta, por un lado, que no se encuentra controvertido que el treinta de noviembre de dos mil veintitrés se recibió de manera física en la oficina de Enlace de Fiscalización de la Junta Local, de la cual es titular el hoy recurrente, el escrito de queja presentado por la representación de Movimiento Ciudadano, sin tener certeza de quién fue la persona que lo recibió, debido a que ese día el inconforme no se encontraba en la oficina por estar haciendo trabajo de campo. Asimismo, tampoco se encuentra controvertido el reconocimiento del recurrente de que el escrito de queja se encontraba trasapelado, y fue a través del Abogado Fiscalizador de la Junta Local que se percató de la existencia de éste, por lo que se instruyó a la citada persona servidora pública remitirlo a la UTF, lo cual aconteció hasta el nueve de enero de dos mil veinticuatro; es decir, con cuarenta días de posterioridad a su presentación.

En este sentido, contrario a lo que afirma el ahora inconforme, la omisión que se le imputa deriva de su falta de atención al desempeñar sus labores con diligencia, cuidado y esmero apropiados; por tanto, tal y como se razona en la Resolución controvertida, y de las constancias que obran en el expediente, se concluye que existió falta de controles implementados para la recepción de la documentación del área que está directamente a su cargo, así como el manejo de los recursos humanos para el buen desempeño de sus actividades, por lo que, contrariamente a lo sostenido por la parte actora, su responsabilidad no solamente se tomó en cuenta la remisión extemporánea del escrito de queja a la UTF, sino la falta de diligencia en el tratamiento de la queja o denuncia.

Ello, porque tal y como lo sostuvo la autoridad resolutora, el hecho de que el recurrente tratara de justificar que no recibió de manera física y directa dicho escrito -porque ese día se encontraba en actividades de campo- no son razones suficientes para eximirlo de la responsabilidad de tener tramos de control y el manejo de los recursos humanos para desempeñar de manera diligente sus actividades encomendadas.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

En efecto, al tener la condición jurídica de persona titular de la oficina en la que se presentó el escrito de queja -el cual reconoció que se traspapeló-, también genera una responsabilidad imputable a él.

En este sentido, de la Resolución se advierte que la responsabilidad acreditada al ahora recurrente fue porque no comprobó cuáles eran los tramos de control que se implementaron para la recepción de la documentación en físico y tampoco acreditó quiénes eran las personas encargadas de tener el control de los sellos de recepción de documentación para recibir cualquier documento, lo que trajo como consecuencia que el escrito de queja en materia de fiscalización se remitiera de manera extemporánea.

Así, la ausencia de tramos de control en la recepción y envío oportuno de la documentación que se recibe en el área de la cual es titular la parte actora -oficina de Enlace de Fiscalización-, ocasionó que el escrito de queja se traspapelara, lo cual es una conducta atribuible al recurrente aún y cuando éste no la haya recibido de manera directa y no se encontrara ese día en la oficina de Enlace de Fiscalización.

De ahí que se considere conforme a Derecho el razonamiento de la autoridad resolutora de que el entonces denunciado incurrió en una omisión de actuar con diligencia, cuidado y esmero en el desempeño de las actividades que realiza en su cargo, lo que trajo como consecuencia que el escrito de queja presentado por la representación de Movimiento Ciudadano no fuera enviado a la UTF para su trámite respectivo en el tiempo de cuarenta y ocho horas previsto en el Reglamento.

Con dicho actuar por parte del recurrente, evidenció la falta de coordinación, organización y supervisión de los procedimientos establecidos en el Reglamento en el desempeño de sus labores, dejando de gestionar los recursos humanos con los que contaba, de ahí que no le asista la razón a la parte actora, tomando en cuenta que, en efecto, fue omiso en cumplir con las obligaciones que el Estatuto prevé en su artículo 71, específicamente, las establecidas en las fracciones XI y XXIII, así como a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento, referente a la materia de fiscalización, y con la normatividad que regula su actuar, dentro de las que se encuentra su cédula de puesto.

En ese sentido, se observa que la autoridad resolutora fue congruente al emitir la Resolución que se revisa, toda vez que también argumentó que esa omisión se dio porque el ahora inconforme, al ser la persona encargada del área de Enlace de Fiscalización, debe tener mecanismos de control que permitan el buen

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

funcionamiento de las actividades que se desempeñan, con independencia de que se encuentre físicamente o no en su lugar de trabajo.

Razonamientos que comparte esta JGE, considerando que ante la ausencia de la parte actora en las oficinas de las cuales es titular, tenía la obligación de tener mayor control, coordinación y mecanismos de vigilancia de las actividades del personal que tiene bajo su cargo, para cumplir con las encomiendas que tiene en el puesto y el buen funcionamiento de sus actividades, lo que, en el caso, no aconteció.

Por lo tanto, resulta correcto que en la Resolución se estableciera como tipo de infracción al inconforme la omisión de realizar sus actividades con la diligencia, cuidado y esmero apropiados, derivado de los hechos que fueron acreditados.

Ahora, respecto a la indebida exhaustividad, la parte actora manifiesta que en la Resolución no se atendió el hecho de que hizo del conocimiento que el escrito de queja siguió con el proceso previsto en la normatividad bajo el expediente INE/Q-COF-UTF/██████, mismo que fue resuelto el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro de forma célere, cumpliendo con el principio de impartición de justicia expedita y pronta.

También, sostiene que con ello se demostró que no existió un daño a la parte promovente de la queja, ni riesgo para el desarrollo de las actividades institucionales, por lo que, la imposición de una amonestación como sanción es lesiva hacia su persona.

Sobre el particular, esta autoridad electoral considera que el agravio es **infundado**, en razón de que, contrario a lo razonado por el recurrente, en la Resolución sí se tomó en cuenta el hecho de que la queja en materia de fiscalización siguió con el trámite respectivo hasta su Resolución, como se evidencia a continuación:

En el apartado de la individualización de la sanción, en específico en el rubro **“Magnitud de la afectación al bien jurídico tutelado”** la autoridad resolutora argumentó: lo siguiente:

*“... Al respecto si bien es posible advertir que existe una conducta infractora consistente en la dilación respecto del envío de la queja en materia de fiscalización a la UTF, dentro de las 48 horas posteriores a su recepción, que en el caso ocurrió 40 días después, en donde el probable responsable -conforme a su cédula de puesto- no demostró que haya gestionado de manera adecuada los recursos humanos para el cumplimiento de las tareas asignadas, **dicha queja fue atendida por la Unidad Técnica de Fiscalización***

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

y se le otorgó el tramite correspondiente, de ahí que tal circunstancia sea un atenuante respecto de la conducta que se le atribuye.¹⁰

*En ese en ese sentido, dada la naturaleza de las conductas, y tomando en consideración que de las pruebas que obran en el expediente se acreditan las mismas, concluyendo que el infractor infringió la normativa estatutaria, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 71, fracciones XI y XXIII del Estatuto, por lo que dichas conductas pueden ser calificadas de leves a graves, y en consecuencia esta autoridad determina que dichas conductas son **leves**, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 356 del Estatuto...”.*

Como se advierte, en la Resolución ahora impugnada, sí se valoró que al haber sido tramitada la queja en materia de fiscalización por parte de la UTF, ello, se tomaría como una **atenuante** para la graduación de la infracción, por lo que, la misma fue considerada como leve.

Argumentos que comparte esta JGE, considerando que el hecho de que se haya dado trámite y su posterior Resolución por parte de la UTF al escrito de queja no puede determinarse como una excluyente de la responsabilidad imputada al hoy recurrente.

En razón de que la infracción en la que incurrió el inconforme derivó de su falta de diligencia, cuidado y esmero apropiados, toda vez que tenía la obligación de tener mayor control, coordinación y mecanismos de vigilancia de las actividades del personal que tenga bajo su cargo, para la remisión del escrito de queja en el término establecido en el Reglamento, lo cual, no está sujeto al resultado de la tramitación o Resolución del procedimiento.

Es decir, el hecho de que el escrito de queja haya sido tramitado por la UTF y en su oportunidad resuelto, deriva de las obligaciones de esa unidad técnica de darle trámite y resolver las controversias que son sometidas a su consideración, más no así, de la remisión oportuna o no del escrito de queja.

En efecto, en cualquiera de los dos escenarios -remisión oportuna o extemporánea- la UTF, en el ámbito de sus facultades, debe determinar lo que en Derecho corresponda respecto de la sustanciación y Resolución de los escritos de queja que se hacen de su conocimiento, por lo que es independiente de la obligación con la que cuentan el personal del Instituto, que en materia de fiscalización les impone su cédula de puesto.

¹⁰ Lo resaltado es propio.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

Bajo estas consideraciones, de manera correcta la autoridad resolutora tomó en cuenta para determinar el grado de afectación que aún y cuando el escrito de queja se mandó con cuarenta días de posterioridad a su presentación, la UTF le dio el trámite correspondiente al mismo, por lo que, esa circunstancia atenuaba la conducta infractora del recurrente.

En ese tenor, es evidente que la autoridad resolutora, contrario a lo afirmado por la parte actora, sí tomo en cuenta el hecho de que se haya tramitado el escrito de queja por parte de la UTF, para concluir que la infracción se calificaría como leve y, en consecuencia, justificar la imposición de la amonestación.

Además, esta JGE considera que la sanción de la amonestación que le impuso al recurrente no resulta desproporcional y no le causa daño, toda vez que, la autoridad resolutora, tomando en cuenta las circunstancias del caso, optó por la sanción más baja o leve que se puede asignar.

Esto es así, considerando que de conformidad con el artículo 350 del Estatuto, éste prevé que el Instituto podrá aplicar a su personal las sanciones **de amonestación**, suspensión, destitución y sanción pecuniaria, previa sustanciación del procedimiento laboral sancionador previsto en este título.

Como se advierte, el Estatuto establece que se puede imponer como sanciones al personal del Instituto desde una amonestación -como mínima sanción- hasta una sanción pecuniaria, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Así, de conformidad con lo previsto en el diverso 355 del mismo ordenamiento, las sanciones se impondrán entre los grados de **mínimo**, medio y máximo.

En ese sentido, la aplicación de una amonestación como sanción, no le resulta lesiva al recurrente, considerando que cuando se acredite la existencia de una infracción, las personas sujetas infractoras podrán ser sancionadas con alguna de las penas previstas en el Estatuto.

Lo cual dependerá de las circunstancias particulares del caso y sólo con la concurrencia de varios elementos que puedan llevar al extremo de imponer el máximo de la sanción, la autoridad resolutora estará en posibilidades de hacerlo.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

Lo anterior, tiene sustento en su parte aplicable del criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XXVIII/2003 de rubro: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”.

De ahí que, la sanción impuesta consistente en una amonestación no resulta lesiva y tampoco le cause algún perjuicio a la parte actora, pues la misma se le impuso de manera congruente con las particularidades y circunstancias de los hechos materia del procedimiento.

Por último, el motivo de agravio relativo a que la Resolución es incongruente y se encuentra indebidamente fundada y motivada, porque, por un lado, al imponerle la sanción se argumentó que no era reincidente en la conducta; y, por el otro, se le impuso una amonestación de manera directa, sin que se le haya apercibido previamente, dejando de tomar en cuenta los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver las sentencias SX-JE-46/2023 y, SX-JE-75/2023 y acumulados.

Por lo que, desde su juicio, primero debió ponerse en una situación de incumplimiento, dilación o desacato previo, en donde se le hiciera del conocimiento las consecuencias o sanciones en las que incurría en caso de desacato - apercibimiento-, para poder en su caso, imponer una medida de apremio o sanción.

Al respecto, esta autoridad administrativa electoral considera que tales motivos de inconformidad son **infundados**, toda vez que el recurrente parte de una premisa inexacta, al considerar que previamente a la imposición de la sanción, debió apercibirse; esto es así, porque la naturaleza de una medida de apremio y una sanción son distintas.

Se afirma lo anterior, porque **las medidas de apremio no constituyen sanciones**, sino que se tratan de medidas procesales dirigidas a lograr, de manera coercitiva, el cumplimiento de lo ordenado en cualquier determinación emitida durante la instrucción de un procedimiento, así como en la Resolución final que se dicte en el mismo¹¹.

¹¹ SUP-REP-196/2016.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

Es decir, las medidas de apremio constituyen instrumentos que pueden imponerse para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad tanto administrativa como jurisdiccional y se diferencian de una sanción, en sentido estricto, en la medida en que buscan lograr el cumplimiento de una Resolución, **y no buscan sancionar una conducta ante la determinación de su ilegalidad**¹².

En el caso particular, el artículo 318 del Estatuto, es coincidente en establecer que las medidas de apremio son el conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales la autoridad hace cumplir sus determinaciones y establece como tales a la *conminación, el extrañamiento y multa*.

En tanto que, las sanciones, como se dijo, buscan sancionar la comisión de una conducta que se considera ilegal, la cual se impone una vez que se ha seguido un procedimiento en contra de las partes a las cuales se le imputa esa irregularidad. Así, tenemos que el artículo 350 del Estatuto otorga la facultad al INE de aplicar a su personal las sanciones de **amonestación**, suspensión, destitución y sanción pecuniaria, **previa sustanciación del procedimiento laboral sancionador**, por lo que resulta evidente que la naturaleza de una medida de apremio y una sanción son distintas.

Máxime que, en términos del artículo 307, el procedimiento laboral sancionador es el mecanismo pertinente para determinar posibles conductas infractoras y, en su caso, imponer sanciones a las personas denunciadas cuando se verifique el incumplimiento de las obligaciones, o bien, se acrediten prohibiciones a cargo del personal, lo cual aconteció en el caso concreto.

Por lo que, no existe fundamento normativo que indique que, previo a la sustanciación y resolución de un procedimiento laboral sancionador, proceda la aplicación de alguna medida de apremio, entre ellas el apercibimiento, como lo aduce la parte recurrente.

Ahora, lo **infundado** del agravio hecho valer por la parte actora, radica en que no existe una indebida fundamentación ni motivación en la imposición de la sanción, toda vez que de la Resolución se advierte que la autoridad resolutoria tomó en cuenta las circunstancias particulares del caso e individualizó correctamente la sanción que se le impuso.

¹² SUP-REP-353/2024 y acumulados.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

Esto es así, ya que contrario a lo sostenido por el ahora inconforme, en la Resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable, en el apartado de **“DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN”**, razonó lo siguiente:

“ ...

➤ **“Tipo de infracción**

*La conducta cometida por el infractor, consistente en la falta consistentes en no desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos; así como no hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la Ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del Instituto, toda vez que el probable infractor envió de manera tardía (40 días después) un escrito que queja, para su trámite respectivo a la UTF, además de no demostrar haber realizado de manera diligente las acciones pertinentes para la recepción y trámites en la oficina a su cargo. Por lo que estamos ante la presencia de una conducta de **omisión**, al inobservar y dejar de hacer lo que la normativa establece. haberla ejecutado, el probable infractor, de manera voluntaria. (sic)*

➤ **Circunstancias de modo, tiempo y lugar**

De las constancias que obran en el expediente, se advierte que la conducta desplegada por el infractor se desarrolló el 09 de enero de 2024, en la que instruyó al abogado fiscalizador enviar a la UTF el escrito de queja en materia de fiscalización promovido por el Partido Político Movimiento Ciudadano, esto es, 40 días después de su recepción en la Junta Local Ejecutiva.

➤ **Nivel Jerárquico**

En el presente procedimiento y al momento de la comisión de la conducta, el probable infractor ocupaba el cargo de Enlace de Fiscalización, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León.

➤ **Grado de responsabilidad e intencionalidad**

En principio se advierte que el infractor, al tener el cargo de Enlace de Fiscalización, adscrito a la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León, debía como parte de sus funciones, gestionar los recursos Humanos para el debido cumplimiento de las tareas, entre ellas, enviar a la UTF dentro del plazo establecido en el artículo 28 del Reglamento, para que esta determine lo conducente; lo que en el caso no ocurrió, ya que el probable infractor solo se limitó a hacer valer su ausencia, por actividades en campo, el día que se recibió la queja en la Junta Local, apartándose de la responsabilidad que tiene como titular de la oficina a su cargo y de los tramos de control que debía implementar, de las personas asignadas y el uso del sello de la recepción y trámite de las quejas recibidas de manera física, en la oficina a su cargo.

RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025

➤ **Reiteración y/o reincidencia de la conducta**

No se tiene registro en cuanto a sanción alguna impuesta al responsable, por lo que no se acredita una reincidencia en la conducta.

➤ **Capacidad económica**

Las condiciones económicas del responsable no guardan relación directa con las infracciones cometidas, dado que, las conductas atribuibles a Alejandro Trejo Villa consisten en la dilación en la presentación de un escrito de queja en materia de fiscalización, para su debido trámite, y, por lo tanto, no se advierte un daño o perjuicio patrimonial al Instituto, ni la obtención de un beneficio económico indebido.

➤ **Personas afectadas por la conducta**

Atendiendo al tipo de las conductas acreditadas, se advierte que no se dio en tiempo el trámite correspondiente a un escrito de queja en materia de fiscalización presentado por el representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano en contra de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y otros.

➤ **Magnitud de la afectación al bien jurídico tutelado**

Se considera que, en el presente asunto, la obligación como personal de este instituto, de llevar a cabo sus funciones en estricto apego a las normas que rigen este Instituto, así como, desempeñarlas con la diligencia, cuidado y esmero, es el bien jurídico tutelado por los artículos 71, fracciones XI y XXIII del Estatuto, y, por ende, su protección comprende el reproche a cualquier acto u omisión por parte del personal del este Instituto.

Por tal motivo, las conductas que se le imputan al infractor consistentes en no desempeñar sus labores con el debido cuidado y esmero, además de no observar las disposiciones, leyes y reglamentos, son inaceptables en el Instituto, y en ese sentido se determinará la sanción idónea y proporcional a la falta cometida por el infractor con la finalidad de inhibir y erradicar ese tipo de conductas.

Al respecto, si bien es posible advertir que existe una conducta infractora consistente en la dilación respecto del envío de la queja en materia de fiscalización, a la UTF, dentro de las 48 horas posteriores a su recepción, que en el caso ocurrió 40 días después, en donde el probable responsable -conforme a su cédula de puesto- no demostró que haya gestionado de manera adecuada los recursos humanos para el cumplimiento de las tareas asignadas, dicha queja fue atendida por la Unidad de Fiscalización y se le otorgó el trámite correspondiente, de ahí que tal circunstancia sea un atenuante respecto de las conductas que se atribuyen.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

En ese sentido, dada la naturaleza de las conductas, y tomando en consideración que de las pruebas que obran en el expediente se acreditan las mismas, concluyendo que el infractor infringió la normativa estatutaria, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 71, fracciones XI y XXIII del Estatuto, por lo que dichas conductas pueden ser calificadas de leves a graves, y en consecuencia esta autoridad determina que dichas conductas son leves, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 356 del Estatuto.

Por lo anterior, en el procedimiento laboral sancionador que se resuelve, la sanción a imponer deberá ser idónea y proporcional a la falta cometida por el infractor, así como para inhibir y erradicar este tipo de conductas, de conformidad con los artículos 350 a 357 del Estatuto, que regulan la facultad del Instituto para imponer sanciones...”.

Como se puede observar, en la resolución combatida se tomó en cuenta, para individualizar la sanción, el tipo de infracción, las circunstancias de modo, tiempo y lugar; el nivel jerárquico del infractor; el grado de responsabilidad; la reiteración o reincidencia en la conducta; la capacidad económica del responsable y la magnitud de afectación al bien jurídico tutelado, **para concluir que la sanción menos levisa y que podía inhibir conductas similares era la amonestación.**

En este sentido, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el hecho de que en la Resolución se haya sostenido que no era reincidente en la conducta no implicaba que la autoridad resolutora previamente a imponerle la amonestación, debió haber apercibido, ya que el estudio de la reincidencia, es parte del que debe realizar la autoridad resolutora y tomar en consideración para la individualización de la sanción en los procedimientos laborales sancionadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 355, fracción IV, del Estatuto.

Por lo tanto, nos encontramos ante una sanción derivada de un procedimiento laboral instaurado en su contra, por un actuar ilegal en el desempeño de sus actividades como persona titular de la oficina de Enlace de Fiscalización de la Junta Local, más no así, de una determinación emitida por una autoridad administrativa o judicial, que deba hacerse cumplir de manera coercitiva a través de una medida de apremio; de ahí que no resulte procedente que se le apercibiera previamente.

Así, resulta congruente que la autoridad resolutora al momento de la individualización de la sanción haya valorado entre otras circunstancias la relacionada con la reincidencia o no en la conducta, para estar en posibilidades de determinar la sanción correspondiente.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

Sin que al efecto resulten aplicables las sentencias emitidas en los expedientes SX-JE-46/2023 y, SX-JE-75/2023 y acumulados a las que hizo referencia el ahora inconforme.

Esto es así, toda vez que los mismos versan sobre la imposición **de una amonestación de forma directa como medida de apremio** que se impuso a las personas integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral de Campeche, por la presunta dilación en la tramitación de procedimientos especiales sancionadores en materia de Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género.

En el asunto, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esas amonestaciones bajo el argumento central que, si bien, el Tribunal del estado de Campeche había aplicado la amonestación como una medida de apremio como parte de las herramientas que tenía a su alcance para alcanzar el cumplimiento de sus determinaciones, **primero debió apercibir a la parte actora**, tal y como se demuestra a continuación:

“ ...

68. De manera que, esta Sala Regional considera que, **para la aplicación de la medida de apremio**, la parte actora primero debió situarse en un supuesto de incumplimiento, dilación o desacato a previo, lo que no ocurrió en el presente caso.

69. Dicho de otra forma, **para poder estar en posibilidad de aplicación de la medida de apremio, primero debió existir la vinculación con un procedimiento en específico, o bien, con algún requerimiento en el cual se hiciera del conocimiento de los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto local cuál o cuáles serían las consecuencias o sanciones que acarrearía su actuación en caso de que no se sujetara a las pautas o directrices apuntadas**, o bien no se advierte alguna actitud negativa, resistencia o, siquiera falta de disposición para cumplir con algún requerimiento formulado durante la sustanciación de algún juicio, lo que, como se dijo sería el presupuesto necesario para imponer una medida de apremio.

70. Dicho de otra forma, **el Tribunal responsable debió verificar que, previo a imponer la amonestación de manera directa, debía existir una determinación de apercibimiento en cualquier otro procedimiento sancionador previo que hubiese resuelto, para que así se actualizara un supuesto de incumplimiento por parte de la autoridad administrativa electoral...**¹³

¹³ Lo resaltado es propio.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

Como se puede observar, en los precedentes citados por el ahora inconforme, la Sala Regional Xalapa referida **razonó que, en la imposición de una medida de apremio de manera directa, previamente se debió apercibir** a las personas integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del estado de Campeche y hacerles del conocimiento las consecuencias que podría traer la continuidad de su presunto actuar indebido.

Supuesto que no acontece en el caso en particular, tomando en cuenta que no se trata de la imposición de una medida de apremio, sino de una sanción que se le aplicó a la parte actora previa sustanciación del procedimiento, en el que se determinó su responsabilidad; de ahí que encuentre sustento el empleo de una sanción y no resulte procedente su argumento en el sentido de que previamente se le debió apercibir.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 368 del Estatuto, así como los fundamentos citados en la presente determinación, al haber resultado ***infundados*** los agravios de la parte recurrente, esta Junta General Ejecutiva:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **confirma** la Resolución dictada en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED].

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Electoral que notifique la presente Resolución a la parte recurrente, a través del correo electrónico señalado en su demanda.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, agregar una copia de la presente Resolución al expediente personal que se tiene a nombre del recurrente y se realicen las acciones a las que haya lugar.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/19/2025**

CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 19 de marzo de 2025, por votación unánime del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Licenciado Alejandro Sosa Durán; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciada Guadalupe Yessica Alarcón Góngora; del Director Ejecutivo de Organización Electoral, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciado Roberto Carlos Félix López; de la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Licenciada María Elena Cornejo Esparza; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Doctora Amaranta Arroyo Ortiz; del encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Maestro Juan Manuel Vázquez Barajas; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Licenciado Hugo Patlán Matehuala; del Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Licenciado Giancarlo Giordano Garibay; de la Secretaria Ejecutiva y Secretaria de la Junta General Ejecutiva, Doctora Claudia Arlett Espino y de la Consejera Presidenta y Presidenta de la Junta General Ejecutiva, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; no estando presente durante el desarrollo de la sesión, el encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Maestro Isaac David Ramírez Bernal.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LA SECRETARIA EJECUTIVA Y
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI
ZAVALA**

**DRA. CLAUDIA ARLETT
ESPINO**